

Naciones Unidas ASAMBLEA GENERAL

VIGESIMO PRIMER PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales



SEXTA COMISION, 914a.
SESION

Miércoles 19 de octubre de 1966,
a las 10.50 horas

NUEVA YORK

SUMARIO

Tema 84 del programa:

Informes de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en la segunda parte de su 17º período de sesiones y en su 18º período de sesiones (continuación) .. 85

Presidente: Sr. Vratislav PĚCHOTA
(Checoslovaquia).

TEMA 84 DEL PROGRAMA

Informes de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en la segunda parte de su 17º período de sesiones y en su 18º período de sesiones (continuación) (A/6309 y Add.1, A/6348, A/C.6/371, A/C.6/L.594/Rev.1, A/C.6/L.596 y Add.1, A/C.6/L.597 y Add.1, A/C.6/L.598)

1. El Sr. MOLINA (Venezuela) después de felicitar a la Comisión de Derecho Internacional por la labor que ha realizado, manifiesta que su delegación no estima oportuno analizar en este momento el proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados de manera detallada, por lo que se limitará a hacer diversos comentarios generales. Estima que la Comisión ha actuado atinadamente al excluir de su proyecto de articulado las materias mencionadas en los párrafos 28 a 34 de su informe (véase A/6309). Sin embargo, el asunto específico de la validez de un tratado en caso de ruptura de hostilidades entre dos o más partes de él, requiere especial atención. Por ejemplo, los tratados conocidos como de "paz y amistad", que en América cuentan con sólidos antecedentes, contienen estipulaciones de excepción para el caso de ruptura de hostilidades, encaminadas generalmente a preservar el respeto de las obligaciones contraídas mediante tales instrumentos. Se trata de una cuestión de singular importancia dentro del derecho internacional contemporáneo y la Comisión debería comenzar su estudio sin mayores dilaciones.

2. La sección 2 de la parte II del proyecto de artículos, relativa a las reservas a los tratados multilaterales, está inteligentemente presentada, pero es muy probable que dé lugar a bastantes controversias. Aunque la llamada "norma panamericana" ha superado definitivamente el clásico sistema de la "unanimidad", subsisten aún dudas razonables respecto de las reservas como, por ejemplo, en el caso en que el ejercicio de la reserva se considere incompatible con el objeto y el fin del tratado (art. 16 c); la autorización tácita de una reserva en el mismo tratado (art. 17, párr. 1); la situación planteada cuando hay un número reducido de Estados negociadores (art. 17, párr. 2) y

el efecto jurídico de una reserva cuando, a pesar de ser objetada, las partes convengan en continuar obligadas por el resto del tratado (arts. 17 y 19).

3. En virtud del párrafo 3 del artículo 41, si una causa de nulidad se refiere sólo a determinadas cláusulas únicamente podrá ser alegada con respecto a esas cláusulas en condiciones especiales, como las siguientes: a) que esas cláusulas sean separables del resto del tratado en lo que respecta a su ejecución, y b) que su aceptación no haya constituido una base esencial del consentimiento de las partes en cuanto al instrumento en su conjunto. Ello ha de exigir un mecanismo de aceptación y de rechazo; alguna disposición procesal sería útil, en este sentido, y la delegación de Venezuela tratará oportunamente de sugerir un criterio práctico al respecto.

4. Un tratado podrá ser objeto de denuncia o retirada, aunque no diga nada al respecto, cuando conste que fue intención de las partes admitir tal posibilidad (art. 53, párr. 1). Puesto que entra aquí en juego un elemento subjetivo de difícil apreciación, la cuestión merece honda reflexión.

5. La terminación de un tratado o la suspensión de su aplicación, como consecuencia implícita de la celebración de un tratado ulterior (art. 56) es otra cuestión que se suscita con frecuencia entre los Estados. En opinión de la delegación venezolana, podría preverse la posibilidad de dar al tratado anterior un carácter supletorio del nuevo en las materias o cuestiones que éste no prevea.

6. El principio generalmente aceptado de rebus sic stantibus se ha consagrado ahora definitivamente en el artículo 59 del proyecto, pero se ha expresado mediante fórmulas negativas. Su importancia especial haría preferible que el párrafo 1 del artículo 59 declarase positivamente que el principio puede ser alegado en determinadas condiciones, esto es, las que figuran en los apartados a) y b) de la disposición, manteniéndose la forma negativa sólo en el párrafo 2.

7. Ha de alabarse a la Comisión de Derecho Internacional por haber incorporado en su proyecto el discutido principio del jus cogens (art. 50). Es evidentemente difícil otorgar el carácter de jus cogens a una norma determinada, pero la Comisión ha hecho lo más a que podía aspirarse y, una vez sentado el principio, su evolución dependerá de la práctica y la experiencia de los Estados.

8. Respecto al artículo 75, relativo al registro y publicación de los tratados, critica el orador la versión española de su comienzo, que dice así: "Los tratados celebrados por las partes en los presentes artículos...", ya que esas palabras dan la impresión

de que, por medio del proyecto de artículos, las partes están celebrando tratados.

9. Por último, se pregunta si las reservas que se pueden hacer respecto a los artículos del proyecto, cuando éstos ya hayan tomado la forma de una convención, estarían sometidos al régimen previsto por el proyecto en su artículo 16, o si sería más adecuado establecer un propio sistema de reservas para la convención. La delegación de Venezuela es partidaria de la segunda fórmula.

10. La delegación venezolana no tiene una posición definida acerca de la propuesta conferencia codificadora y acepta, en principio, las ideas sugeridas por el Secretario General en su memorando (A/C.6/371). Cuando se abra el debate sobre los proyectos de resolución que se han presentado al efecto, la delegación de Venezuela emitirá su parecer.

11. El Sr. FLITAN (Rumania) elogia a la Comisión de Derecho Internacional por sus excelentes informes (A/6309), en los que se recogen los resultados de muchos años de trabajo, y rinde tributo especial a su Presidente, a Sir Humphrey Waldock, Relator Especial sobre el derecho de los tratados, y al Sr. Milan Bartoš, Relator Especial sobre las misiones especiales. Estima que, aun cuando en el momento actual no sería oportuno examinar en detalle el proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados, la Sexta Comisión puede considerar con provecho diversos problemas importantes y cuestiones de principio que plantea el proyecto, ya que sus deliberaciones habrán de constituir una fuente muy útil de documentación para los gobiernos y para la proyectada conferencia diplomática.

12. La Comisión de Derecho Internacional, al revisar su proyecto inicial, ha prescindido de diversas disposiciones de carácter expositivo o explicativo. Animada del deseo de preparar un instrumento jurídico aceptable para el mayor número de Estados, ha dejado asimismo de lado determinados asuntos controvertibles, a pesar de que con frecuencia suponen cuestiones de principio relativas a la regulación de las relaciones convencionales entre los Estados. Desde luego, es esencial la prudencia, dada la complejidad del material que ha de codificarse, pero quizás la Comisión haya extremado la precaución en ciertos aspectos. La codificación del derecho internacional no debe limitarse a formular y coordinar las normas existentes, sino que además debe efectuar una contribución eficaz a su desarrollo progresivo. Ese principio, que ha orientado todas las labores de la Comisión en materia de codificación, y que ha sido reafirmado en anteriores conferencias codificadoras, es de importancia particular en el caso del derecho de los tratados. El Sr. Flitan, teniendo en cuenta las indicadas consideraciones, hará ciertas observaciones sobre diversas cuestiones que, en opinión de la delegación rumana, son de importancia especial.

13. En primer lugar, la convención propuesta debería establecer el principio de la universalidad de los tratados multilaterales generales y declarar expresamente que todos los Estados tienen derecho a participar en ellos. Según se dice en el comentario al artículo 12 del proyecto, ese principio se debatió ampliamente por la Comisión en relación con los

artículos 8 y 9 del anteproyecto, y es de lamentar que esos artículos hayan quedado eliminados del proyecto definitivo, ya que la universalidad es esencial para el desarrollo de la cooperación internacional basada en el respeto de la soberanía y la igualdad de los Estados.

14. En segundo lugar, en cuanto al artículo 49 del proyecto, que se deriva del principio jurídico básico que prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la definición del término "fuerza" debería abarcar específicamente, no sólo a la fuerza armada, sino también a los demás tipos de coacción, incluso la presión económica y política. Es evidente, con respecto a la coacción en general, que los tratados únicamente son válidos si los Estados lo celebran libremente y de buena fe. Sin embargo, en el pasado, los Estados imperialistas han impuesto tratados desiguales a otros países mediante diversas formas de presión, y algunos de esos Estados siguen desarrollando tal política, sobre todo con respecto a los Estados que han alcanzado recientemente su independencia, a fin de mantener de una u otra forma la dominación colonial, en menosprecio de los principios de la Carta y de las resoluciones de la Asamblea General sobre la abolición del colonialismo. El artículo 49, por tanto, debería referirse expresamente a todas las formas de presión, incluidas la económica y la política.

15. En tercer lugar, el Sr. Flitan desea referirse a la cuestión de las reservas a los tratados multilaterales. La Comisión de Derecho Internacional, tras resistir con éxito todo intento de imponer la doctrina tradicional al respecto, ha llegado a la conclusión de que la solución mejor adaptada a las necesidades actuales de la comunidad mundial es la que asegura que el mayor número posible de Estados participe, total o parcialmente, en los tratados multilaterales. Sin embargo, la Comisión no parece haber sacado todas las conclusiones implícitas de esa solución, ya que el apartado b) del párrafo 4 del artículo 17 del proyecto dice que la objeción hecha por otro Estado contratante a una reserva impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado que ha hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, a menos que el Estado autor de la objeción manifieste la intención contraria. A juicio de la delegación rumana, se serviría mejor a la causa de la cooperación internacional si se estipulara que el tratado entra en vigor entre los Estados autores de la reserva y de la objeción, si no se manifiesta por el Estado objetante la intención contraria. Tal disposición sería también más lógica.

16. En cuarto lugar, la delegación de Rumania cree que deberían figurar en el preámbulo a la convención proyectada los principios que deben regir las relaciones internacionales. En su opinión, el concepto básico en el que deben fundarse esas relaciones es el derecho de todos los Estados a regir sus propios asuntos, libres de toda injerencia exterior. La política de Rumania al respecto fue definida por el Ministro de Relaciones Exteriores rumano, quien, hablando ante la Asamblea General el día 14 de octubre de 1966, dijo (1442a. sesión plenaria) que los principios de la independencia y de la soberanía nacional, la igualdad de derechos y la no intervención en los

asuntos internos de otros Estados eran la única base racional y universalmente aceptable para el desarrollo de las relaciones entre los Estados, el robustecimiento de la confianza mutua y el respeto entre los pueblos y la consolidación de la paz.

17. Por último, la delegación de Rumania apoya la recomendación de la Comisión relativa a la convocatoria de una conferencia diplomática y da las gracias al Secretario General por su memorando sobre los problemas de procedimiento y organización planteados (A/C.6/371). El proyecto de artículos ofrece una buena base para la discusión en la conferencia; los artículos adoptados deben ser recogidos en una convención única. La delegación de Rumania preferiría que la conferencia se desarrollase en un período de sesiones único y que contase también con una sola comisión plenaria. Debe darse tiempo a los gobiernos para que estudien a fondo el proyecto de artículos, por lo que la conferencia no debería celebrarse antes de 1968. El derecho de los tratados no se circunscribe a determinadas esferas limitadas de las relaciones internacionales, como fue el caso en anteriores conferencias codificadoras. Si ha de concluirse una convención efectiva sobre una materia de interés tan universal, deben participar en su preparación todos los Estados y por ello la delegación rumana apoya la enmienda de Checoslovaquia, Polonia y la URSS (A/C.6/L.598) al proyecto de resolución de las ocho Potencias (A/C.6/L.596).

18. El Sr. ALCIVAR (Ecuador) dice que el proyecto definitivo de artículos sobre el derecho de los tratados (véase A/6309) constituye, no sólo un trabajo de alto valor jurídico, sino también una importante contribución a la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. En muchos aspectos, rompe los viejos moldes del derecho clásico para dar paso a nuevos principios concordantes con la realidad de los actuales tiempos, que exige para la comunidad internacional un orden jurídico más justo. Rinde homenaje al Sr. Alcivar a los sucesivos relatores especiales sobre el derecho de los tratados, y apoya la sugerencia de que se invite a Sir Humphrey Waldock a la conferencia que ha de preparar una convención sobre el derecho de los tratados.

19. La dificultad de encontrar una fórmula práctica que permita diferenciar los tratados stricto sensu de los tratados en forma simplificada que se mencionaban en el proyecto de 1962 — exentos de la formalidad de la ratificación para entrar en vigor — ha hecho que se abandone la distinción en el proyecto actual. Ahora, en el artículo 11 se sienta la regla general de que un tratado no requiere ratificación para obligar a los Estados a menos que esa exigencia conste expresamente en el propio tratado o que la intención de esa exigencia se deduzca por alguno de los medios señalados en ese artículo. La delegación ecuatoriana no sólo encuentra difícil coordinar tal disposición con el apartado c) del párrafo 2 del artículo 6, según el cual únicamente los representantes acreditados de los Estados ante una conferencia internacional o ante un órgano de una organización internacional están facultados para adoptar el texto de un tratado, sino que además le preocupa el dilatado alcance de dicha norma. Por otra parte, comprende que la amplia acepción concedida a la palabra

"tratado" en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 2 crearía serios problemas de derecho interno en una gran variedad de acuerdos internacionales sobre cuestiones de orden administrativo normalmente confiadas al poder ejecutivo, acuerdos que requerirían para entrar en vigor engorrosos procedimientos constitucionales. En todo caso, la delegación del Ecuador opina que siempre será posible encontrar fórmulas jurídicas que armonicen los objetivos que se persiguen.

20. La delegación del Ecuador ratifica firmemente las opiniones que expresó en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General sobre la regla pacta sunt servanda (A/CN.4/182, cap. II). Esa regla de derecho consuetudinario continúa vigente para preservar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, pero sus efectos se encuentran limitados por las normas jurídicas imperativas de la Carta de las Naciones Unidas. La buena fe es condición sine qua non y, al mismo tiempo, indivisible en la celebración de los tratados internacionales: si falta en el acto que originó las obligaciones, no se la puede invocar parcialmente para demandar su cumplimiento; la buena fe compromete el honor de los Estados, y el honor tampoco es divisible.

21. En virtud del artículo 23 del proyecto, sólo los tratados en vigor obligan a las partes, y el que un tratado tenga vigencia depende, no sólo de requisitos formales sino también del contenido sustantivo de la validez legal del instrumento. De ahí que la Comisión se remita, en el artículo 23 del proyecto, al párrafo 2 del Artículo 2 de la Carta, en el que se instituye que los Miembros de la Organización deben cumplir de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esa Carta. La prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza, el respeto a la integridad territorial y a la independencia política de los Estados, la libre determinación de los pueblos, la igualdad soberana de los Estados, la prohibición de intervenir en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales del hombre, son normas imperativas de orden público internacional incorporadas a la Carta, que no admiten excepción alguna, que tienen carácter de jus cogens y que han adquirido la jerarquía de preceptos constitucionales. La regla pacta sunt servanda no puede amparar un tratado internacional que viole las normas jurídicas de la Carta de las Naciones Unidas.

22. El artículo 47 del proyecto trata de la corrupción de un representante de un Estado, lo que, en realidad, es una de las formas del dolo, y la delegación del Ecuador considera que la introducción de este nuevo artículo aclara el concepto de los vicios del consentimiento. No obstante, lo que le produce serias dudas es que la regla allegans contraria non audiendus est, contenida en el artículo 42 del proyecto, se aplique al error y al dolo. Los vicios del consentimiento hacen el tratado nulo ab initio, y esa nulidad no puede subsanarse.

23. A la delegación del Ecuador le interesa de modo especial el artículo 49 del proyecto, relativo a la coacción ejercida sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Con anterioridad al Pacto de la Sociedad de las Naciones, el uso de la fuerza no se

había proscrito formalmente. La legalidad de la guerra se había aceptado desde el bellum justum de la escolástica hasta el justus hostis de la época moderna; todavía en 1904, en la 5a. edición de su obra A Treatise on International Law, Hall decía que el derecho internacional no tenía más remedio que aceptar la guerra, independientemente de la justicia de su origen. Aunque las dos Conferencias de La Haya lograron regular el ius in bello, la institución del ius ad bellum se mantuvo intacta hasta el Tratado de Versalles.

24. El primer intento de hacer ilegal el uso de la fuerza se encuentra en los Artículos 10 a 15 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, en los que se estableció un régimen para evitar la guerra. A pesar de las fisuras resultantes de la aplicación del Artículo 12 y de la interpretación restrictiva que, con criterio político antes que jurídico, se dio a la palabra "guerra", es en el Pacto donde se inicia el proceso de la proscripción de la fuerza como medio de resolver las controversias internacionales y donde nace el "moderno derecho" al que se refiere la Comisión en el comentario al artículo 49 del proyecto.

25. En el Pacto Briand-Kellogg, que constituyó el segundo escalón en el proceso, los Estados contratantes condenan el recurso a la guerra para el arreglo de controversias internacionales y renuncian a ella como instrumento de política nacional en sus relaciones mutuas. Desgraciadamente, no se dotó a ese instrumento de un mecanismo que lo hiciera operante. Tanto ese Pacto como el de la Sociedad de las Naciones se crearon para preservar la paz, pero les faltó poder para imponerla. De todas maneras, las obligaciones contraídas en el Pacto Briand-Kellogg se encuentran en vigencia y su violación constituyó una de las principales acusaciones en los procesos de Nuremberg.

26. A diferencia de la Sociedad de las Naciones, las Naciones Unidas tomaron forma y adquirieron personalidad jurídica en una Carta cuyas disposiciones se convirtieron en preceptos constitucionales obligatorios en la esfera universal. La Sociedad de las Naciones era meramente una asociación de Estados, socios de la misma, mientras que las Naciones Unidas son la comunidad internacional jurídicamente organizada.

27. El párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta es, sin lugar a dudas, su principio vertebral y sobre él descansa el régimen de la seguridad internacional. En virtud de esa disposición se proscribió de modo absoluto y sin excepción alguna, no sólo la guerra sino, en general, el uso de la fuerza o la amenaza de ella. Es cierto que la Carta reconoce en su Artículo 51 el derecho de legítima defensa y que instituye en el Capítulo VII medidas que puede tomar la Organización en los casos de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, pero ninguna de esas facultades constituyen excepciones al principio de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. La legítima defensa, concepto tomado del derecho penal, es causa de exención de responsabilidad y no puede tener otro sentido en la Carta porque, además, debe existir proporcionalidad entre la magnitud del ataque armado y los medios que se emplean en la defensa. En cuanto a las medidas contempladas

en el Capítulo VII son inherentes a la autoridad que ejercen las Naciones Unidas sobre los Miembros de la comunidad internacional.

28. A pesar de la clara redacción del párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta, se ha pretendido darle una interpretación restringida, basada en la frase "contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado". Se ha alegado que la amenaza o el uso de la fuerza se prohíben únicamente cuando van dirigidos contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado. Si se adoptara tal tesis, los "desembarcos protectores" del derecho internacional clásico — defendidos aún en nuestros días por ciertos autores, que los consideran incluso una contribución a los propósitos de las Naciones Unidas, especialmente al del respeto de los derechos humanos — seguirían siendo legítimos. Sin embargo, los que sostienen tal interpretación olvidan la frase final de esa disposición de la Carta: "o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas". El Comité encargado de su redacción en San Francisco declaró que el uso unilateral de la fuerza o de medidas coercitivas similares no estaba autorizado ni admitido y que, por consiguiente, sólo sería legítimo para respaldar las decisiones de la Organización. Todo uso de la fuerza que no tenga carácter de medida colectiva está prohibido en la Carta.

29. En virtud del artículo 49 del proyecto, la nulidad surge no sólo cuando la celebración del tratado se ha obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza, sino también cuando hay violación de los principios de la Carta. Estos principios obligan a los Estados Miembros de las Naciones Unidas e incluso a los que no son miembros, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 6 del Artículo 2. Es perfectamente lógico que sean nulos los tratados que violan dichos principios.

30. El Artículo 103 de la Carta se aplica a cuatro casos distintos: 1) tratados celebrados entre Estados Miembros de las Naciones Unidas antes de la vigencia de la Carta; 2) tratados celebrados entre Estados Miembros de las Naciones Unidas después de la vigencia de la Carta; 3) tratados celebrados entre Estados Miembros y no miembros de las Naciones Unidas antes de la vigencia de la Carta, y 4) tratados celebrados entre Estados Miembros y no miembros de las Naciones Unidas después de la vigencia de la Carta. El Artículo 103 no representa novedad alguna en cuanto al principio que rige el primer caso. Tradicionalmente, en caso de conflicto entre dos tratados incompatibles cuyas partes son las mismas, el derecho internacional aplica la regla lex posterior derogat priori. Por esta razón, los tratadistas, con criterio unánime, sostienen que, aunque no se hubiera incorporado a la Carta el Artículo 103, las obligaciones impuestas por ella hubieran prevalecido siempre sobre las que hubieran contraído los Miembros antes de la vigencia de la Carta. El mismo principio fue incorporado al párrafo 1 del Artículo 20 del Pacto de la Sociedad de las Naciones.

31. El segundo caso plantea el problema de la aplicación de la regla lex prior derogat posteriori, que es la antítesis de la regla tradicional de derecho internacional. En este caso, el Artículo 103 destaca con toda claridad el carácter constitucional de la

Carta. El profesor Kelsen ha atribuido la nulidad de los tratados posteriores a lo dispuesto en los Artículos 108 y 109, en los que se establece el régimen de reformas a la Carta. Un principio similar se incluyó en el párrafo 1 del Artículo 20 del Pacto.

32. El tercer caso es el que plantea un cambio radical en los preceptos del derecho internacional al ignorar el principio *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*. Muchos tratadistas, como por ejemplo Ross, se sienten incómodos por esta nueva fórmula revolucionaria; otros, como Jiménez de Aréchaga, la han acogido con agrado. La razón del cambio, como se dice en las actas del Comité IV de la Conferencia de San Francisco es que, en caso de conflicto entre las obligaciones impuestas por tratados celebrados con Estados no miembros y las obligaciones impuestas a los Estados Miembros por la Carta, estas últimas deben prevalecer.

33. En el cuarto caso, se aplica la regla *lex prior derogat posteriori*.

34. El Sr. Alcívar llega a la conclusión de que todo tratado impuesto por la amenaza o el uso de la fuerza, antes o después de hallarse en vigor la Carta de las Naciones Unidas, adolece *ab initio* de nulidad absoluta, ya que el expresado vicio del consentimiento viola los principios constitucionales de la Carta.

35. La delegación del Ecuador apoya la propuesta de que en el preámbulo de la convención se subraye la regla *pacta sunt servanda*, y pide también que se subrayen otros principios medulares, entre ellos los que se refieren a uso de la fuerza y a la violación de las normas de *jus cogens* como causas de nulidad de los tratados. El preámbulo, además de servir para interpretar el documento, ha de ser también, en cierta medida, fuente de obligaciones jurídicas. Existen en el mundo muchos acuerdos por los que se ha despojado a países débiles de su territorio o se les han impuesto cargas económicas. Esos instrumentos injustos — producto de la fuerza — no pueden perdurar. La antigua regla de que nadie debe enriquecerse con perjuicio de otro sigue siendo válida.

36. El Sr. KOITA (Mali) felicita a la Comisión de Derecho Internacional por el proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados (véase A/6309), que será una base sólida para elaborar una convención general que refleje las modernas tendencias del derecho internacional. Como han señalado oradores anteriores, el desarrollo progresivo del derecho internacional, que es de gran importancia para todos los Estados, presenta especial interés para los de reciente independencia. El derecho de los tratados debe basarse en la igualdad soberana de los Estados, a fin de garantizar que se respeten sus derechos inalienables. En un mundo constantemente amenazado por una catástrofe nuclear, en el que la interdependencia de los pueblos es una realidad y la coexistencia de distintos sistemas sociales y económicos una necesidad, en el que los fuertes amenazan a los débiles y el colonialismo y el imperialismo intentan sofocar la voz de los pueblos que luchan por su libertad, sería poco realista intentar mantener un sistema estático de derecho internacional, opuesto a la evolución del fenómeno jurídico. Por ello, la delegación de Mali considera que la proyectada convención sobre el de-

recho de los Estados debe tener por objeto promover la causa de la paz y de la cooperación leal entre todos los Estados, con independencia de sus sistemas políticos, sociales y económicos. En su opinión, la participación en los tratados multilaterales generales debe estar abierta a todos los Estados, sin discriminación alguna.

37. Teniendo en cuenta la aparición de nuevos Estados como consecuencia del proceso de descolonización, la delegación de Mali lamenta que la Comisión de Derecho Internacional no haya podido dar cima a su examen de temas tan importantes como las misiones especiales, las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales, la responsabilidad de los Estados y la sucesión de Estados y de gobiernos. Hay que confiar en que la Comisión concluya su labor sobre estas materias en su próximo período de sesiones y proponga soluciones concretas.

38. La delegación de Mali confía también en que la Comisión y la proyectada conferencia de plenipotenciarios dediquen atención especial a la cláusula de la nación más favorecida, que es de gran importancia tanto en los tratados bilaterales como en los multilaterales, especialmente en los de carácter económico, y que resulta de especial interés para los países en desarrollo.

39. La delegación de Mali aprueba la sugerencia hecha por el representante de Argelia (908a. sesión) de que, en el artículo 49 del proyecto, se amplíe el concepto de la amenaza o el uso de la fuerza a fin de que incluya también la presión económica o de otro tipo.

40. Con respecto a la aplicación de los tratados a la totalidad del territorio de cada parte (artículo 25 del proyecto), la delegación de Mali desea destacar el caso de las Potencias coloniales que obligan a los pueblos sometidos a firmar tratados que tienen por objeto favorecer los intereses egoístas del país metropolitano. Los pueblos colonizados declararán nulos esos tratados tan pronto como alcancen la independencia, y la delegación de Mali confía en que sea posible conseguir la descolonización general y completa antes de que se reúna la conferencia de plenipotenciarios.

41. El Sr. Koita desea dar las gracias a la Oficina Europea de las Naciones Unidas por haber organizado el Seminario sobre derecho internacional y confía en que sigan celebrándose tales seminarios durante muchos años, en beneficio de los países en desarrollo.

42. Desea también dar las gracias al Secretario General por su excelente memorando sobre la proyectada conferencia (A/C.6/371); la delegación de Mali no tiene todavía una opinión formada sobre la organización de ésta, pero opina que debe invitarse a ella a todos los Estados si se desea que redunde en provecho de toda la comunidad mundial.

43. El Sr. YASSEEN (Presidente de la Comisión de Derecho Internacional) dice que el debate general sobre los informes de la Comisión ha puesto nuevamente de relieve la eficacia del sistema instituido por las Naciones Unidas en lo que se refiere al desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. El éxito de este sistema se ha debido en

gran parte al método de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, que ha permitido un alto grado de eficaz cooperación entre ésta y la Asamblea General, en todas las etapas de su labor.

44. Le es muy grato observar que los informes de la Comisión (A/6309) han encontrado, en general, favorable acogida en la Sexta Comisión y que el sentir general parece ser favorable a las recomendaciones que en ellos se hacen. Todos los miembros han convenido en que el proyecto de articulado constituye una buena base para las deliberaciones encaminadas a celebrar una convención sobre el derecho de los tratados, aunque algunos hayan expresado sus dudas con respecto a determinadas disposiciones, como las que se refieren a los vicios del consentimiento, al jus cogens y a la cláusula rebus sic standibus. El Sr. Yasseen no se cree en el deber de responder a esas objeciones; dado que la actitud de la Comisión queda muy clara en el informe, quiere recordar simplemente que ésta trató en todo momento de encontrar la mejor solución posible para un problema determinado, dentro de los límites impuestos por las realidades de la vida internacional. La Comisión no tenía ningún interés — subraya el orador — en hacer bellas construcciones teóricas que cayeran en la abstracción. Por otra parte, sin embargo, no consideró conveniente hacer depender la evolución normativa del orden jurídico internacional de su evolución institucional. La dificultad de la formulación de algunos principios, como el de la supremacía de las normas de jus cogens, no le ha impedido declarar la existencia de esos principios ni extraer de ellos todas las consecuencias necesarias.

45. Algunos miembros han criticado a la Comisión por haber limitado el alcance del proyecto de artículos a los tratados celebrados entre Estados; otros han deplorado que en esos artículos no figuren disposiciones relativas a la sucesión de Estados en los tratados. El orador estima que la opinión de la Comisión al respecto está totalmente justificada, tanto por razones prácticas como técnicas. En fin de cuentas, el derecho de los tratados toca de cerca muchos problemas del orden jurídico internacional y si la Comisión hubiera intentando ocuparse de todos, habría necesitado mucho más tiempo para poder dar cima a su tarea. Concretamente, la cuestión de la sucesión de Estados es, sin duda, muy importante en la época actual pero, dado que el derecho de los tratados sólo se refiere a uno de sus aspectos, cree el Sr. Yasseen que es preferible esperar a que la Comisión pueda ocuparse de la materia en su conjunto. La codificación exige estudios a fondo largos y minuciosos, y si se quieren alcanzar resultados duraderos, no debe hacerse nada por acelerarlos.

46. Le complace observar que parece haber acuerdo en que la Sexta Comisión examine el proyecto de artículos en su próximo período de sesiones; tal examen facilitaría mucho la tarea de la conferencia, dando a conocer de antemano las posiciones de los distintos gobiernos. Observa también con satisfac-

ción que la Sexta Comisión es partidaria de que se invite a la conferencia a Sir Humphrey Waldock, Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional. Para terminar, da las gracias a la Sexta Comisión por los cordiales homenajes que se han tributado a su persona.

47. El PRESIDENTE anuncia que el representante del Uruguay, patrocinador del proyecto de resolución que figura en el documento A/C.6/L.594/Rev.1, ha decidido retirarlo y sumarse a los autores del proyecto de resolución contenido en el documento A/C.6/L.597.

48. El Sr. WERSHOF (Canadá) da las gracias al representante del Uruguay por el espíritu de cooperación que ha mostrado al retirar su proyecto de resolución y unirse a los patrocinadores del proyecto de resolución que figura en el documento A/C.6/L.597. Este último proyecto no debe confundirse con el proyecto de resolución del documento A/C.6/L.596, también copatrocinado por la delegación del Canadá, que se refiere exclusivamente a la parte de los informes de la Comisión relativa al derecho de los tratados. El proyecto de resolución que figura en el documento A/C.6/L.597 se ocupa de otras partes de los informes de la Comisión y sigue el esquema tradicional de tales resoluciones.

49. En relación con el apartado a) del párrafo 4 de la parte dispositiva de dicho proyecto, el Sr. Wershof señala el párrafo 71 del informe de la Comisión (véase A/6309), en el que ésta decide pedir a los Estados Miembros que presenten sus observaciones sobre el tema de las misiones especiales lo más pronto posible y, en todo caso, antes del 1 de marzo de 1967. El Asesor Jurídico le ha informado de que la Secretaría ha enviado a los gobiernos ya circulares al respecto, y resulta innecesario mencionar el vencimiento del plazo en el apartado a) del párrafo 4 de la parte dispositiva, pero sugiere que el Relator haga referencia a él en su informe.

50. Con respecto al apartado b) del indicado párrafo 4, el orador observa que la mayoría de los miembros han manifestado su deseo de que la Comisión dé mayor prioridad a la cuestión de la sucesión de Estados y de gobiernos. El orador confía en que la Comisión tenga en cuenta tal deseo cuando organice sus trabajos.

51. Dado que el proyecto de resolución que figura en el documento A/C.6/L.597 es ya tradicional y por su carácter se presta poco a controversias, el señor Wershof confía en que sea objeto de aprobación unánime.

52. El Sr. ROSENNE (Israel) sugiere que los patrocinadores de los proyectos de resolución contenidos en los documentos A/C.6/L.596 y L.597 lleguen a un acuerdo para poner distintos títulos a sus respectivos textos a fin de evitar toda posibilidad de confusión.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.